



Nota del Consejo General de Caritas Española ante la reforma de la Ley de Extranjería

6 de noviembre de 2009

Desde nuestra dilatada experiencia de trabajo en el campo de las migraciones y en fidelidad a nuestra opción preferencial y evangélica por los últimos y no atendidos, desde el Consejo General de Caritas Española

MANIFESTAMOS nuestra preocupación ante el proceso de reforma de la Ley de Extranjería y los riesgos que ese proyecto legislativo entraña para el adecuado reconocimiento de los derechos y libertades de los extranjeros en España.

En coherencia con los pronunciamientos que, en el marco de una acción conjunta de incidencia pública, vienen impulsando en los dos últimos meses CEAR, Caritas y la Red Acoge,

ALERTAMOS sobre el retroceso que puede producirse en un terreno donde distintos agentes sociales e interlocutores políticos hemos venido avanzado con no pocos esfuerzos para consensuar las bases de una auténtica política de Estado en materia de inmigración y extranjería.

NOS PREOCUPA que, urgidos por una coyuntura económica desfavorable o la premura impuesta por una agenda política, se esté promoviendo un proceso legislativo que suponga una restricción de los derechos de los inmigrantes y una vulneración de su dignidad humana al reforzar su imagen como simple mano de obra en un mercado de trabajo en recesión.

AGRADECEMOS, en este sentido, las palabras especialmente oportunas de Benedicto XVI en su última encíclica, cuando, tras recordar que *“estos trabajadores no pueden ser considerados como una mercancía o mera fuerza laboral”*, afirma que *“todo emigrante es una persona que posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”* (*Caritas in Veritate* nº 62).

NOS OPONEMOS a un marco legal que suponga dar carta de naturaleza en nuestro sistema de garantías constitucionales a un modelo insolidario y discriminatorio.

Porque somos muy conscientes del coste humano que está suponiendo el actual momento de crisis para las personas más vulnerables y porque cada día

constatamos en nuestra red confederal de centros y servicios de acogida el drama silencioso al que se enfrentan las víctimas de la pobreza,

NO COMPATIMOS un modelo de sociedad que discrimine entre ciudadanos de primera y de segunda o que suponga abrir un paréntesis en los valores democráticos de la acogida y la generosidad.

Porque nos reafirmamos en uno de los principios evangélicos que inspira la acción en la gratuidad de Cáritas --*“Fui extranjero y me acogisteis”*--,

NO PODEMOS ACEPTAR una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX) que devalúe al proceso de diálogo y consenso social sobre el hecho migratorio en el que hemos participado de manera activa en los últimos años para garantizar los derechos de los inmigrantes y configurar una alternativa ante Europa de política migratoria justa y generosa.

Porque estamos trabajando para que 2010 suponga para nuestro país una auténtica oportunidad para avanzar en el horizonte de la cohesión social, que aproveche las oportunidades que la crisis nos ofrece para cambiar el modelo económico y caminar hacia un cambio de valores y actitudes,

REAFIRMAMOS nuestra defensa del derecho a migrar y del derecho a no migrar, porque nuestra opción a favor del acceso universal a todos los bienes significa avanzar en un modelo de crecimiento basado en el principio de que “si no es de toda la persona y de todas las personas, no es verdadero desarrollo” (*Populorum Progressio*, Pablo VI).

INVITAMOS a las Cáritas Diocesanas y a todos los agentes de Cáritas a mantener una actitud personal y colectiva de máxima alerta ante este proceso de reforma legal, y a manifestar su compromiso activo en aquellas actividades de sensibilización e incidencia pública que se promuevan en el seno de nuestra Confederación. Queremos recordar que es entre todos cómo se construye una visión integradora de la migración, por lo que de nosotros depende que estos cambios legislativos consoliden un tipo de sociedad que no queremos.

REITERAMOS, por todo ello, ante la comunidad cristiana, la opinión pública y los responsables políticos nuestra oposición a una reforma legislativa que nos afecta a todos, que difumina una memoria reciente en la que tantos de nosotros también fuimos extranjeros, que pone en riesgo el futuro de inclusión que perseguimos, que limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y que supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y convivencia. □